

Biblioteca Abierta

Otros títulos

Prácticas agropecuarias y degradación del suelo en el Valle de Saquenipá, provincia de Tunja, siglos XVI y XVII

Katherine Giselle Mora Pacheco

Serie Historia

Semillas de historia ambiental

Stefania Gallini (editora)

Serie Perspectivas Ambientales

Extractivismo minero en Colombia y América Latina

Barbara Göbel y Astrid Ulloa (editoras)

Serie Perspectivas Ambientales

Perspectivas sobre el paisaje

Susana Barrera Lobatón y Julieth Monroy Hernández

(editoras)

Serie Perspectivas Ambientales

Culturas, conocimientos, políticas y ciudadanías en torno al cambio climático

Astrid Ulloa y Andrea Ivette Prieto-Rozo (editoras)

Serie Perspectivas Ambientales

Perspectivas culturales del clima

Astrid Ulloa (editora)

Serie Perspectivas Ambientales

La actual globalización de la naturaleza implica no solo la apropiación global de la tierra y de los recursos, sino también el crecimiento sin precedentes de las huellas ecológicas y los «flujos de importación y exportación de la naturaleza». El auge del extractivismo genera profundas transformaciones en las relaciones entre sociedad, naturaleza y Estado e incrementa las desigualdades y asimetrías sociales. Este libro reúne trabajos realizados desde varias disciplinas (antropología, historia, sociología, ciencias políticas, derecho, entre otros) con el propósito de ofrecer un panorama amplio y rico con novedosos estudios de caso que aumentan la comprensión de problemas complejos, como las interdependencias que conjugan desigualdades ambientales, sociales, políticas, económicas y culturales, al tiempo que abren nuevos interrogantes a la investigación.

La obra refleja la actividad de un colectivo de investigación que ha tenido el tiempo y la oportunidad de madurar sus análisis de la evidencia y de producir reflexiones renovadoras en el campo de las desigualdades socioambientales. La interacción entre temas latinoamericanos y perspectivas globales, con una profundidad histórica poco frecuente en la literatura sobre estos temas, dejará satisfechos a los lectores contemporáneos. Este libro equilibra el tratamiento empírico y la construcción teórica, lo cual hace de este un material muy útil para la docencia, la investigación y la lectura del público general interesado en las actuales problemáticas socioambientales y la instauración de desigualdades sociales relacionadas.

Hebe Vessuri

Investigadora emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

Investigadora adjunta del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM), México



Barbara Göbel
Manuel Góngora-Mera
Astrid Ulloa
EDITORES

Desigualdades socioambientales
en América Latina

430
· Perspectivas Ambientales ·

COLECCIÓN GENERAL
biblioteca abierta

Perspectivas Ambientales



Desigualdades socioambientales en América Latina

Barbara Göbel
Manuel Góngora-Mera
Astrid Ulloa
EDITORES

Ibero-Amerikanisches
Institut
Preußischer Kulturbesitz



Autores

Ana María Isidoro Losada

Freie Universität Berlin (Alemania)

Astrid Ulloa

Universidad Nacional de Colombia · Red desigualdades.net

Barbara Göbel

Ibero-Amerikanisches Institut (Alemania) · Red desigualdades.net

Carla Gras

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad Nacional de San Martín (Argentina)

Claudia María Leal León

Universidad de los Andes (Colombia)

David Manuel-Navarrete

Arizona State University (Estados Unidos)

Deborah Delgado Pugley

Université Catholique de Louvain (Bélgica)

Diana Ojeda

Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Imme Scholz

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) (Alemania)

Jairo Baquero Melo

Freie Universität Berlin (Alemania) · Red desigualdades.net

Javier Echaide

Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Argentina)

Kristin Wintersteen

University of Houston (Estados Unidos)

Kristina Dietz

Freie Universität Berlin (Alemania) · Red desigualdades.net

Manuel Góngora-Mera

Freie Universität Berlin (Alemania) · Red desigualdades.net

Michael Redclift

King's College London (Inglaterra)

Roberto P. Guimarães

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (Brasil) · Initiative for Equality · Red desigualdades.net

Renata Motta

Freie Universität Berlin (Alemania) · Red desigualdades.net

Shawn van Ausdal

Universidad de los Andes (Colombia)



biblioteca abierta

colección general **perspectivas ambientales**

Desigualdades socioambientales en América Latina

Barbara Göbel

Manuel Góngora-Mera

Astrid Ulloa

editores



**Ibero-Amerikanisches
Institut**
Preußischer Kulturbesitz



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
GRUPO CULTURA Y AMBIENTE

2014

CATALOGACIÓN EN LA PUBLICACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Desigualdades socioambientales en América Latina / Barbara Göbel, Manuel Góngora-Mera, Astrid Ulloa, editores. – Bogotá : Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Facultad de Ciencias Humanas. Grupo Cultura y Ambiente : Berlín : Ibero-Amerikanisches Institut, 2014
510 páginas : ilustraciones, mapas – (Biblioteca Abierta. Perspectivas Ambientales)

Incluye referencias bibliográficas

ISBN : 978-958-775-221-2

1. Desigualdad socioambiental 2. Medio ambiente - Aspectos sociales 3. Agroindustria 4. Hombres - Influencia del medio ambiente 5. Derecho internacional ambiental 6. Fragmentación del derecho internacional 7. Extractivismo 8. Cambios climáticos - Aspectos sociales 9. Comunidades indígenas - América Latina 10. Campesinos - América Latina 11. Empresas internacionales - América Latina 12. Globalización 13. América Latina - Clima I. Göbel, Barbara, 1962-, editor II. Góngora-Mera, Manuel, 1977-, editor III. Ulloa, Astrid, 1964-, editor IV Serie

CDD-21 333.714 / 2014

Desigualdades socioambientales en América Latina

Biblioteca Abierta

Colección General, serie Perspectivas Ambientales

© Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas,
Primera edición, 2014

ISBN: 978-958-775-221-2

© Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín, 2014

© Editores, 2014
Barbara Göbel, Manuel Góngora-Mera y Astrid Ulloa

© Varios autores, 2014

Con el apoyo financiero de Bundesministerium
für Bildung und Forschung

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas

Comité editorial

Ricardo Sánchez Ángel, decano
Melba Libia Cárdenas Beltrán, vicedecana académica
Marta Zambrano, vicedecana de investigación
Jorge Aurelio Díaz, profesor especial
Claudia Lucía Ordóñez, profesora asociada
Carlos Toñato, profesor asociado

Diseño original de la Colección Biblioteca Abierta
Camilo Umaña

Preparación editorial

Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas
Esteban Giraldo González, director
Felipe Solano Fitzgerald, coordinación editorial
Diego Mesa Quintero, coordinación gráfica
editorial_fch@unal.edu.co
www.humanas.unal.edu.co

Bogotá, 2014

Impreso en Colombia

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio
sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Contenido

Presentación	11
BARBARA GÖBEL, MANUEL GÓNGORA-MERA Y ASTRID ULLOA	
Las interdependencias entre la valorización global de la naturaleza y las desigualdades sociales: abordajes multidisciplinares	13
PRIMERA PARTE	
Aproximaciones conceptuales a las desigualdades socioambientales	
KRISTINA DIETZ Y ANA MARÍA ISIDORO LOSADA	
Dimensiones socioambientales de desigualdad: enfoques, conceptos y categorías para el análisis desde las ciencias sociales	49
IMME SCHOLZ	
¿Qué sabemos sobre desigualdades socioecológicas? Elementos para una respuesta	85
ROBERTO P. GUIMARÃES	
Medio ambiente y desigualdades socioeconómicas en América Latina: lineamientos para una agenda de investigación	113
ASTRID ULLOA	
Escenarios de creación, extracción, apropiación y globalización de las naturalezas: emergencia de desigualdades socioambientales	139

SEGUNDA PARTE

Geografías de la apropiación de la naturaleza

CLAUDIA LEAL Y SHAWN VAN AUSDAL

**Paisajes de libertad y desigualdad: historias ambientales
de las costas Pacífica y Caribe de Colombia** 169

CARLA GRAS Y BARBARA GÖBEL

**Agronegocio y desigualdades socioambientales:
la soja en Argentina, Brasil y Uruguay** 211

DIANA OJEDA

**Descarbonización y despojo: desigualdades socioambientales
y las geografías del cambio climático** 255

DAVID MANUEL-NAVARRETE Y MICHAEL REDCLIFT

**Espacios de consumismo y consumo del espacio:
la comercialización turística de la Riviera Maya** 291

KRISTIN WINTERSTEEN

**Proteína del mar: el auge global de la harina de pescado
y la industrialización de las pesquerías en el Pacífico
Sudoriental, 1918-1973** 309

TERCERA PARTE

Globalización de la naturaleza y fragmentación del derecho internacional

JAVIER ECHAIDE

**El derecho de protección de inversiones y el derecho
humano al agua: asimetría normativa para un derecho
internacional fragmentado** 341

MANUEL GÓNGORA-MERA

Y RENATA MOTTA

**El derecho internacional y la mercantilización biohegemónica
de la naturaleza: la diseminación normativa de la propiedad
intelectual sobre semillas en Colombia y Argentina** 395

JAIRO BAQUERO MELO

**Acaparamiento de tierras, regímenes normativos
y resistencia social: el caso del Bajo Atrato en Colombia** 435

DEBORAH DELGADO PUGLEY

**¿Cómo se afectan los derechos de los pueblos indígenas
con las reformas para facilitar la integración económica
y la conservación de la Amazonia?** 459

Acerca de las autoras y los autores 487

Índice de materias 497

Índice de lugares 505

Descarbonización y despojo: desigualdades socioambientales y las geografías del cambio climático*

Diana Ojeda

Universidad Javeriana (Bogotá)

Introducción

Desde la ecología política, mi trabajo se ha enfocado en el análisis de conflictos socioambientales en la región del Caribe colombiano. Mi interés ha sido, sobre todo, analizar la manera en que iniciativas de conservación ambiental y de desarrollo sostenible a menudo producen y refuerzan dinámicas de exclusión, subordinación y despojo. Los *imperativos verdes*, como me refiero a las narrativas hegemónicas sobre el medio ambiente y a sus efectos en la producción de espacios y sujetos, a menudo están implicados en la configuración de las geografías profundamente desiguales del capital, la movilidad y la seguridad en Colombia (Ojeda 2012). Fue a partir de estas preocupaciones que me vinculé a desigualdades.net. La apuesta analítica de la red parte de una perspectiva multiescalar que busca dar cuenta de las configuraciones transnacionales

* Las ideas preliminares que llevaron a la escritura de este texto surgieron de varias discusiones con miembros de la Red desigualdades.net, a quienes quiero agradecer por sus valiosos comentarios y sugerencias. También quiero dar las gracias a los estudiantes y colegas que han nutrido mi trabajo durante ya varios años en el marco del Grupo de Investigación en Estudios Culturales y, más recientemente, del proyecto de investigación

y transregionales que subyacen a la producción de desigualdades sociales en América Latina. Este énfasis en las interdependencias e interconexiones resulta, a mi modo de ver, necesario para comprender las disputas y negociaciones en torno al medio ambiente. No se trata, entonces, solamente de entender las relaciones entre los conflictos locales y los fenómenos globales, sino de examinar cómo las desigualdades socioecológicas producen —a la vez que son producidas por— complejas ecologías políticas que trascienden las escalas de análisis usuales de la comunidad, la nación y el continente.

Mi trabajo reciente en Montes de María, una subregión del Caribe colombiano, me ha llevado a preguntarme en particular por el actual régimen de «ecogubernamentalidad climática» (Ulloa 2004) y sus conexiones con procesos locales de acaparamiento de tierras. Junto con el equipo de trabajo del que hago parte, hemos rastreado etnográficamente cómo se articulan las iniciativas de mitigación del cambio climático con formas violentas de reconfiguración del uso y control de los recursos, sobre todo de la tierra y el agua, en una zona constituida históricamente por las contradicciones entre proyectos agroindustriales a gran escala y distintos proyectos de autonomía territorial. Esto se ha debido a que nuestras preguntas sobre las dramáticas interrupciones en las formas de sustento y los modos de vida de poblaciones rurales apuntan siempre en la misma dirección: los desiertos verdes de palma aceitera para la producción de agrocombustibles y de teca (*Tectona grandis*), entre otras especies maderables, para la captura y fijación de carbono. También, desde nuestro trabajo, hemos podido ver que las complejas realidades que se dibujan a partir de las luchas por el acceso, uso, control y la representación misma de los recursos no pueden ser reducidas a simples manifestaciones de lo global en lo local. Las relaciones entre estas

«Imperativos verdes y subjetividades ambientales campesinas» (financiado por la Universidad Javeriana), en particular a Juan Guillermo Rojas, Ana Catalina Rodríguez, Catalina Quiroga, Jennifer Petzl, Carlos Del Cairo, Diana Bocarejo, Julio Arias, Sonia Serna, Teo Ballvé y Eduardo Restrepo. Por último, agradezco a Dianne Rocheleau quien, con su trabajo, siempre me ha inspirado a pensar de manera más crítica, cuidadosa y comprometida.

dos escalas —y otras como el estado² y la región— no operan como si estas fueran contenedores anidados o realidades preexistentes. Se trata más bien de complejas «redes enraizadas» (Rocheleau y Roth 2007; Rocheleau 2011) donde las representaciones de y prácticas sobre la naturaleza y el medio ambiente, que se producen y circulan por ellas, tienen efectos materiales en la producción de esos espacios que designamos como locales o globales³.

Concuerdo con el argumento de Marianne Braig y Barbara Göbel (2013) según el cual el *crecimiento económico verde* produce profundas asimetrías de poder. Como señalan las autoras, las desigualdades que se derivan de la *economía verde* (o de la *nueva economía climática*)⁴ deben ser entendidas desde los conflictos, negociaciones y resistencias localizados que se han dado en torno a la globalización de la naturaleza. Sin embargo, como ilustraré a partir del ejemplo de la implementación de proyectos de descarbonización en Montes de María en Colombia, pensar que se trata de la incorporación de lo local a los mercados verdes globales no permite dar cuenta de los complejos amarres entre procesos concretos de

2 Uso *estado* en minúscula para contrarrestar las narrativas sobre este como una entidad coherente, homogénea y estática.

3 Véase Massey (1994) para una discusión detallada sobre la importancia de pensar el espacio relacionamente, y trascender lo local y lo global como entidades binarias.

4 El término *economía verde* hace referencia a una economía menos dependiente de combustibles fósiles y con bajas emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero. El término ha sido definido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o UNEP por su sigla en inglés) como «aquella [economía] que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente» (PNUMA 2011, 1). La fuerza que se le ha dado al uso generalizado del término en los últimos años habla de las confluencias, a menudo contradictorias, entre acumulación de capital e iniciativas de protección del medio ambiente. El 24 de septiembre del 2013, la Comisión Global sobre Economía y Clima, conformada por Colombia, Etiopía, Indonesia, Corea, Noruega, Suecia y el Reino Unido, y liderada por el expresidente de México, Felipe Calderón, anunció el proyecto de la «nueva economía climática» que busca investigar cómo los esfuerzos por enfrentar el cambio climático no van en contravía del desarrollo económico (WRI 2013).

despojo y la manera en la que se interpreta la crisis global ambiental y se imaginan sus posibles soluciones. Quisiera mostrar cómo eso mismo que entendemos por lo local y lo global, sus formas de interactuar y sus asociaciones con el sur y el norte global⁵ deben ser entendidos como el resultado de estas asimetrías de poder (Bulkeley 2005). Mi argumento está en línea también con las reflexiones de Eduardo Gudynas (2009, 2012) y Maristella Svampa (2011) acerca del modelo neoextractivista y sus efectos socioambientales en América Latina, sobre todo en lo que se refiere a la agroindustria como una economía extractiva que convierte recursos naturales fundamentales en mercancías que tienen muy poca relevancia local. Sin embargo, como mostraré más adelante, mi interés está puesto en las reconfiguraciones locales y en las conexiones multiescalares que las sustentan, que no pueden ser explicadas desde el concepto de desterritorialización que propone Gudynas (2005)⁶.

Mi apuesta es, entonces, analizar «las relaciones materiales en las redes socioecológicas que entrelazan múltiples territorios de extracción, producción, circulación, consumo y transformación» (Rocheleau 2011, 215. Traducción propia). Dianne Rocheleau propone el concepto de *redes enraizadas* para dar cuenta de cómo estas redes son tanto sociales como ecológicas y materiales, lo que nos obliga a tomar en serio las relaciones de poder y rastrearlas tanto en los patrones como en los procesos que conectan lugares y territorios a través de las distintas escalas. De este modo, las redes enraizadas permiten «[a]nalizar las imbricaciones entre la gente y los elementos bióticos y físicos del mundo material y la construcción de nuevas ecologías [...]», para lo cual es necesario «[...] anclar las redes a la tierra, localizarlas, ponerlas en su lugar (en lugares), pero no como simples polígonos» (2011, 215. Traducción propia). La apuesta analítica de Rocheleau está en sintonía con distintos autores que notan cómo la idea de centro-periferia y norte-sur, entre otros binarios, no permite reconocer las complejas

5 Uso norte y sur global en minúsculas con el propósito de resaltar su carácter socialmente construido y desestabilizar su producción como entidades preexistentes, homogéneas o estáticas.

6 Véase Haesbaert (2011) para una crítica a la noción de desterritorialización.

articulaciones que conectan procesos económicos, políticos e institucionales con transformaciones localizadas de ecosistemas y comunidades. Desde el concepto de *ensamblajes globales* propuesto por Anna Tsing (2005) resulta entonces más fácil reconocer las *constelaciones* socioecológicas que entrelazan políticas internacionales, proyectos de desarrollo, instituciones estatales, entre otros elementos, y sus efectos concretos y materiales. Más aún, como proponen Laura Ogden *et al.* (2013), estos ensamblajes globales deben ser entendidos como formas transnacionales de gobernanza socioecológica con efectos dramáticos en la capacidad de poblaciones en el sur global de responder, adaptarse y sobrevivir a la crisis ambiental global.

Desde esta perspectiva, espero poder contribuir a una geopolítica crítica del cambio climático que haga contrapeso a las viejas geografías imaginadas de un *aquí* desarrollado, repositorio de la razón y el conocimiento, y un *allá* por desarrollar, saturado de los anhelos edénicos de una naturaleza exuberante, pero mal manejada. Este mapa aplanado, donde la desigualdad y sus redes enraizadas se desdibujan, presenta al planeta, la región, el bosque y la comunidad como entidades fijas, homogéneas y preexistentes, y no como el resultado mismo de las representaciones de y prácticas sobre la naturaleza, y de sus múltiples interconexiones que se tejen a través de la diferencia y la distancia. A partir de un análisis de los espacios que resultan de las formas concretas en las que se entretejen las metas de carbono cero, los incentivos económicos para frenar la deforestación, los proyectos agroindustriales, las balas y los títulos, propongo entonces algunas herramientas analíticas para el estudio de las desigualdades socioambientales desde una perspectiva multiescalar.

La naturaleza del nuevo orden verde global

En el mapa colombiano, así como en el de muchos otros lugares que constituyen el sur global, las cartografías de la extracción aparecen superpuestas con aquellas de la protección de la naturaleza y de los proyectos productivos que se implementan en nombre del mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes locales.

Desarrollo y conservación se proclaman como bienes últimos, y las contradicciones entre medio ambiente y crecimiento económico terminan borrándose en función de las actuales dinámicas de la acumulación de capital bajo el proyecto neoliberal. Distintos autores han mostrado cómo, a pesar de sus propias genealogías, el neoliberalismo, la conservación ambiental y el desarrollo —incluyendo sus versiones sostenibles, alternativas, participativas y comunitarias más recientes— se encuentran estrechamente relacionados no solo en sus objetivos y dispositivos, sino en sus dinámicas de producción espacial (p. ej. Tsing 2005; Heynen *et al.* 2007; Antipode 2010; Escobar 2010). Así, los bosques de Kalimatán en Indonesia, los monocultivos de palma en el Pacífico colombiano y las reservas naturales de Tanzania pueden ser entendidos como la espacialización misma de proyectos, a primera vista antagónicos, donde discursos concatenados de eficiencia, competitividad, desregulación, protección de la diversidad (tanto biológica como cultural), mitigación del cambio climático y empoderamiento de las comunidades locales, entre otros, terminan por facilitar la acumulación de capital. Este tipo de superposiciones y producciones espaciales se hacen evidentes en las estrategias de mitigación del cambio climático, en particular a través de las nuevas estrategias de control de la naturaleza y el «nuevo orden verde global» que configuran (Ulloa 2013, 123)⁷.

Por supuesto, los complejos procesos de producción de la naturaleza asociados a los proyectos políticos, que se configuran bajo las banderas de la conservación y el desarrollo, no pueden reducirse a un esquema predefinido cuyo resultado se conoce de antemano. Es solo a partir del análisis de las articulaciones concretas que sustentan la *economía verde* donde se vislumbran sus lógicas y contradicciones, así como sus consecuencias socioecológicas⁸.

7 Leis y Viola (2003) analizan la historia del surgimiento de este régimen global de cambio climático en función de lo que ellos definen como la gobernabilidad global del clima.

8 Recorro entonces a la noción de articulación de Hall (2010) para dar cuenta de cómo se dan esos amarres concretos, de cómo sus configuraciones toman forma a partir de un contexto particular, y de cómo los procesos implicados

Busco profundizar en cómo las articulaciones entre el proyecto neoliberal, las estrategias de descarbonización y las imposiciones desde el imaginario del *desarrollo limpio y sustentable* no ocurren en el vacío. El espacio en que se materializan estas relaciones está lejos de ser un contenedor prefijado. Las relaciones de poder que se entretejen en torno a las representaciones y prácticas de la crisis ambiental global —los imperativos verdes— permiten justamente atender a los ensambles entre neoliberalismo, conservación y desarrollo, así como a su dimensión espacial. Estas espacialidades pueden ser analizadas en términos del actual régimen de *ecogubernamentalidad climática global* (Ulloa 2004). En su trabajo, Astrid Ulloa define la ecogubernamentalidad como

[t]odas las políticas, los discursos, los conocimientos, las representaciones y las prácticas ambientales (locales, nacionales y transnacionales) que interactúan con el propósito de dirigir a los actores sociales (cuerpos verdes) a pensar y comportarse de maneras particulares hacia fines ambientales específicos (desarrollo sostenible, seguridad ambiental, conservación de la biodiversidad, acceso a recursos genéticos, entre otros). (2004, XLII)

Siguiendo la noción de formación discursiva de Foucault, Ulloa (2004, 134) señala cómo cierta manera de pensar el clima se traduce en una serie de prácticas, conductas y políticas, entre otros dispositivos, que terminan por crear una geopolítica del conocimiento en torno al cambio climático que implica «una nueva colonialidad centrada en las estrategias y en los poderes globales, que expanden nuevamente una sola visión de conocimientos» (Ulloa 2012, 18). Como la autora señala, esta geopolítica del conocimiento tiene claros efectos materiales en la manera en la que se reconfiguran las territorialidades de la intervención, la adaptación, la mitigación y el uso de los recursos.

y sus resultados se dan sin un camino predeterminado. Al respecto, Diana Bocarejo (en prensa) propone la noción de *articulaciones espaciales* para dar cuenta de cómo estas interrelaciones resultan en la producción del espacio y, para el caso colombiano, tienen profundas consecuencias en la manera en la que se corresponden las topologías y tipologías de la diferencia.

A esta geopolítica del conocimiento, y a sus efectos en la producción de espacios concretos, es a lo que me refiero en términos más generales como las geografías del cambio climático. Estoy de acuerdo con Ulloa en que la ecogubernamentalidad climática articula lo local con lo global, reconfigurando las relaciones entre, por ejemplo, Montes de María, Colombia y el planeta. Sin embargo, considero que el análisis debe enfocarse en cómo se producen estos espacios y las escalas interconectadas de las que hacen parte. Es decir, pretendo mostrar que lo local y lo global se actualizan y materializan a través de las políticas, las intervenciones y las representaciones que crea y pone en circulación este régimen ecogubernamental. Mi pregunta está anclada, entonces, en la ecología política del cambio climático (p. ej. Peet, Robbins y Watts 2011) y en las geografías materiales y simbólicas que constituyen la *naturaleza climatizada* (Ulloa 2012, 17) como el objeto privilegiado de intervención de estas articulaciones en torno al clima.

Las representaciones sobre la crisis ambiental global y las prácticas en relación con esta necesitan de una naturaleza particular. Se trata de una naturaleza planetaria y espectacularizada, que ha sido producida sobre todo desde imágenes satelitales y programas de televisión hiperproducidos (Igoe 2010). Esta naturaleza sigue aferrada a las dicotomías problemáticas entre naturaleza y cultura que subyacen al pensamiento moderno y las desigualdades que este dualismo posibilita (Plumwood 1993). Además, se debate entre los viejos tropos de la naturaleza indómita que hay que controlar y una naturaleza edénica que hay que proteger (Merchant 1996). Esta naturaleza de los imperativos verdes en torno al clima, a la vez vengativa y en peligro, se genera a partir de una geopolítica desigual del conocimiento donde distintas formas de resistencia y resignificación son marginadas (Ulloa 2013, 120). La naturaleza climatizada implica una visión muy restringida de esta, donde solo unos pocos tienen la autoridad para hablar para y por ella (Braun 2002; Boykoff 2009, 2011).

Por supuesto, la naturaleza que invocan ambientalistas, candidatos presidenciales, movimientos indígenas, funcionarios públicos y empresarios no es siempre la misma. Si bien esta es un campo en

constante disputa, las narrativas y prácticas del cambio climático han llegado a decantar una versión hegemónica de la naturaleza atravesada violentamente por su mercantilización. Desde la minería de litio hasta los planes ecoturísticos, la geopolítica particular de la sustentabilidad, la conservación y el desarrollo limpio bajo el nuevo orden verde global ha implicado «la economización de la naturaleza y la ecologización de la economía» (Leff 2005, 3). En particular, las construcciones históricas de Colombia como país tropical y megadiverso han contribuido a profundas transformaciones en la valorización y control de las naturalezas en Montes de María. Por ejemplo, la narrativa desde distintas instituciones oficiales y ONG de conservación promueve los espacios de producción y reproducción social como oportunidades de acumulación de capital: «Los bosques de Colombia tienen un importante componente de biodiversidad, lo que puede generar un mayor interés en los inversionistas [...] por los cobeneficios que se generan al proteger estas áreas *carbono gourmet*» (Ortega *et al.* 2010, 43. Énfasis añadido).

Quizás una de las mayores paradojas de esta política cultural del cambio climático, que se deriva precisamente de esta mercantilización, es cómo el capital se plantea como la salida más viable a la crisis ambiental que tanto ha contribuido a producir (Sullivan 2009). A lo largo de la última década, la ONU ha promovido la *economía verde* como la nueva cara del desarrollo sostenible. Sus tres estrategias dejan en claro las conexiones entre las narrativas de catástrofe climática y la acumulación de capital (Pskowski 2013, 1): crear mercados para los beneficios y costos ambientales; usar avances tecnológicos intensivos en capital para la mitigación del cambio climático o adaptación a este; y privatizar el manejo ambiental (incluyendo la provisión de agua) en el nombre de una mayor eficiencia. En su trabajo, Coronado y Dietz (2013) dan cuenta de la manera en la que la economía verde no se puede desligar de un modelo neoextractivista, basado en la sobreexplotación de recursos naturales, que se puede identificar a partir de tres elementos:

- 1) las nuevas demandas del mercado global y una nueva estructura geopolítica y geoeconómica; 2) una intensificación de interdependencias transregionales y, 3) la emergencia de un nuevo imaginario de desarrollo llamado «economía verde» que promete

superar la contradicción entre desarrollo y medio ambiente [...].
(Coronado y Dietz 2013, 97)

Y añaden: «A pesar de los debates críticos a nivel global sobre la creciente destrucción ecológica, la apropiación extractivista y capitalista de la naturaleza sigue siendo el fondo de este imaginario» (98). Así, los autores muestran cómo las nuevas prácticas de financiarización y mercantilización de la naturaleza deben ser entendidas a partir de las interdependencias entre procesos nacionales y globales.

El sentido común sobre la crisis ambiental global asume que el mercado nos va a salvar, que es cuestión de que se dé (como caída del cielo) una innovación tecnológica que mitigue las consecuencias de las actividades humanas sin que estas deban transformarse radicalmente. Peor aún, que el problema se soluciona con corregir lo que hacen aquellos sujetos destructores —desde el campesino que roza y quema, hasta la mujer pobre del tercer mundo que tiene demasiados hijos— y lograr que tomen, finalmente, una conciencia ecológica planetaria. Autores como Mike Davis (2008, 2010) y Larry Lohmann (2006, 2008) han señalado cómo las narrativas en torno al cambio climático borran justamente las causas estructurales de las muchas crisis ambientales, y sus orígenes y consecuencias multiescales. Se trata de una política reduccionista con gran potencial despolitizante.

Las narrativas y prácticas en torno al cambio climático desconectan y aplanan las geografías desiguales de la crisis ambiental al asumir que se trata de un problema planetario que, mal que bien, reparte las responsabilidades y consecuencias a través del globo. Es común, incluso, escuchar en los medios y en paneles de expertos que el aumento en la temperatura no ve color de piel, ni ninguna otra distinción. Pero una y otra vez lo que vemos es que las consecuencias de la crisis ambiental son radicalmente distintas a lo largo de los ejes de diferenciación de clase, género, raza, etnicidad y edad (p. ej. Seager 2006; Katz 2008). Aun cuando se reconoce que los países del norte y las empresas deben compensar por su alta cuota en el calentamiento global, esto se entiende bajo el lente economi-

cista de las externalidades, al punto que el mercado de las licencias por contaminar, bajo la figura de bonos de carbono, es una realidad que ha reconfigurado violentamente el mapa del acceso a los recursos en distintas regiones. Asimismo, cuando se entiende que el sur global es más vulnerable a los efectos del cambio climático, las narrativas de la catástrofe global inminente terminan por reforzar dinámicas de marginación y exclusión interregional. Como ha señalado Betsy Hartmann (2010), los miedos activados desde la idea de que los *refugiados climáticos* del sur global van a invadir el norte global están estrechamente relacionados con militarización, sexismo, racismo y xenofobia⁹.

El diseño e implementación de políticas transnacionales en torno al cambio climático dejan en evidencia las asimetrías de poder que hacen posible el régimen ecogubernamental actual, a la vez que son generadas por este. La crisis global ambiental ha sido reducida a un problema de emisiones de dióxido de carbono y el mercado ha pasado a verse como la solución (Lohmann 2006). Los desiertos verdes de palma aceitera y de teca en Montes de María así lo atestiguan. Estos imperativos verdes requieren de una geopolítica particular: un norte, responsable de reducir su consumo de combustibles fósiles (consumiendo más agrocombustibles) y de frenar la degradación de bosques distantes (consumiendo más créditos de carbono), y un sur que se encargue de proveer ambos. Como señala Fernando Coronil, esta geopolítica se constituye a partir de una división global del trabajo y la naturaleza donde los procesos de creación del valor implican la producción de bienes, sujetos y naturalezas particulares (2002, 6). Así, se ha usado el término de *CO2lonización* para pensar la forma en la que la intervención desde el norte, ya sea a través de cooperación internacional, de organismos no gubernamentales

9 Al respecto, Joel Wainwright y Geoff Mann analizan el orden político-económico que se ha constituido en torno al cambio climático y advierten que el cambio climático global «[...] ha producido las condiciones bajo las cuales “el paradigma de seguridad como la técnica normal de gobierno” está siendo solicitada a una escala y dimensión antes inimaginada» (2013: 2-3. Traducción propia).

o de empresas transnacionales, es la que dicta cómo se debe hacer frente al cambio climático desde el sur.

Los imperativos verdes no solo nacen de estas desigualdades transregionales, sino que terminan reproduciéndolas a través de una geopolítica excluyente, como señala Ulloa (2012). Así, la manera en la que se tramitan las ansiedades planetarias asociadas a la crisis ambiental tiene efectos espaciales concretos que se traducen en profundas desigualdades en cuanto a las posibilidades de uso, acceso, control y representación de los recursos. ¿Qué naturalezas son apropiables para bien de todo el planeta? ¿Quiénes dictan cómo deben ser usadas y protegidas? ¿Quiénes deben poner las tierras, el trabajo e incluso la vida al servicio de este fin último de *salvar el planeta*?

Mercados verdes, despojos verdes

Montes de María es una región del Caribe colombiano emblemática tanto por las importantes movilizaciones campesinas (desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC), como por la violencia que durante varias décadas ha configurado sus ecologías políticas. La región se ha caracterizado por fuertes luchas por el acceso a los recursos naturales, que a menudo se han desatado en torno al establecimiento y la expansión de la ganadería extensiva y la agroindustria. Como ocurre para el resto de Colombia, las masacres, los asesinatos selectivos, los desplazamientos masivos, las desapariciones forzadas y las amenazas que han devastado social y materialmente a Montes de María no se pueden entender por fuera de las disputas por los recursos naturales, en particular por la tierra (De Los Ríos, Becerra y Oyaga 2012). En ese sentido, Montes de María es un «medio ambiente violento» (Peluso y Watts 2001). Como distintos estudios en el campo de la ecología política lo han demostrado, los ambientes violentos no se dan *naturalmente* ni debido a una ubicación geográfica específica. Michael Watts (1983, 2004), por ejemplo, señala cómo los mitos de la maldición de los recursos y de la escasez natural, basados en el determinismo geográfico, invisibilizan las historias y geografías saturadas de poder que explican la violencia. Las décadas de muerte, sufrimiento y despojo que han

vivido y sobrevivido muchos de los habitantes rurales de Montes de María, y quienes ya no están ahí, no se pueden desligar de estas relaciones de poder ni de sus claras sedimentaciones en paisajes de destrucción que, irónicamente, son resignificados como paisajes de seguridad y producción y, más aún, de protección ambiental.

Al recorrer la región de Montes de María uno de estos paisajes resulta particularmente abrumador: las plantaciones de palma y teca, perfectamente alineadas y eternas. Coronado y Dietz (2013) dan cuenta de la relación entre violencia y el establecimiento de plantaciones de palma aceitera, para producción de biodiésel, en el municipio de María la Baja. En su análisis, los autores exponen la manera en la que se conectan la economía verde y el despojo de tierras en esta región, indicando que «lo que marca el antes y el después del proyecto de palma es la violencia y la victimización de los pobladores de María la Baja» (2013, 109). Así, los autores muestran cómo el despojo es una consecuencia de la implementación de cultivos que son exportados de Colombia con el fin de reducir el uso de combustibles fósiles en otros países, como Estados Unidos y Alemania. Pero las geografías sedimentadas¹⁰ de la violencia de Montes de María muestran que esta no es solo una clara consecuencia de las plantaciones, sino que es mediante mecanismos violentos que se ha dado el vaciamiento de miles de hectáreas y el consecuente establecimiento de proyectos vestidos de desarrollo, sostenibilidad y construcción de paz.

Morritz Tenthoff (2011) hace un estudio detallado de las plantaciones de teca que tiene la empresa de cementos Argos s.a. en la región de Montes de María. En su investigación quedan claras las conexiones entre la lucha contra el cambio climático, la violencia en la región y «la legalización del despojo, el control territorial y la imposición de megaproyectos industriales» (2011, 1). Estas conexiones son

¹⁰ Siguiendo el trabajo de Donald Moore (2005) sobre los paisajes de despojo racializado en Zimbabwe, entiendo las *geografías sedimentadas* como las historias acumuladas que resultan en producciones espaciales concretas. Se trata de geografías simbólicas y materiales que dan cuenta de cómo los procesos sociales, con temporalidades distintas pero superpuestas, son inescapablemente espaciales (Ojeda 2012, 8).

más que la simple producción y circulación de mercancías verdes en el sur global para ser consumidas en el norte global. Las relaciones de poder que conectan proyectos de descarbonización, capital nacional e internacional, planes de desarrollo, (para)militarización, convenciones sobre el clima y violencia, que describe Tenthoff, van más allá de la incorporación de la naturaleza de Montes de María a la economía verde. Estas relaciones muestran múltiples interdependencias multiescalares con claras materializaciones espaciales. Estas redes enraizadas se escapan de líneas unidireccionales de causalidad y exigen entender que, a menudo, la violencia es constitutiva de la producción de paisajes extractivos que se forjan en nombre de la naturaleza, en particular de la naturaleza climática.

Los proyectos verdes en Montes de María se inscriben en un momento particular de la historia colombiana. Las dos últimas décadas han estado caracterizadas por una masiva contrarreforma agraria. La expansión del control territorial paramilitar, que contó con el consentimiento y el apoyo del estado, implicó una drástica reconfiguración del control de los recursos naturales en el país, sobre todo de la tierra y del agua (Verdad Abierta 2013). Según fuentes oficiales, tan solo entre 1996 y 2005 en Montes de María hubo un total de 49 masacres con más de 300 víctimas y cerca de 145 mil desplazados (De Los Ríos, Becerra y Oyaga 2012, 6). Las fosas comunes (44 solo en el departamento de Sucre) empezaron a dar cuenta de la magnitud de la violencia; los asesinatos, los bloqueos económicos a poblaciones enteras, las capturas masivas y las desapariciones forzadas fueron efectuados por estructuras paramilitares en conjunto con la Fuerza Pública. Además, la tierra desocupada a la fuerza —más de 80 mil hectáreas durante la década comprendida entre 1997 y 2007 (2012, 36)— fue luego comprada por distintos empresarios de la región y de otros lugares del país para la implementación de proyectos agroindustriales. La compra masiva de tierras, así como su especulación y la transferencia forzada de títulos, constituye un nuevo mecanismo de despojo¹¹. El robo

11 Grajales (2011) en su trabajo da cuenta de los mecanismos de la legalización del despojo en Colombia.

legalizado de más de 37.000 hectáreas queda, además, protegido bajo la figura de compras de «buena fe», que por determinación del gobierno no serán incluidas en los proyectos estatales de restitución de tierras que se adelantan en la actualidad. Estas hectáreas han sido destinadas a plantaciones de palma de aceite para biodiésel, caña para etanol y especies maderables, como teca, para depósitos de carbono (2012, 59).

Aún hoy es evidente que no se puede hablar de posconflicto, como ha insistido el discurso oficial. El poder de grupos paramilitares en la región ha tenido un fuerte impacto, sobre todo comprometiendo las formas de sustento de miles de pobladores rurales. Los nuevos grupos paramilitares (denominados por el estado como BACRIM, Bandas Criminales Emergentes) siguen detrás de las amenazas, el hostigamiento, los asesinatos y las desapariciones, muchos de ellos asociados a los esquemas de vigilancia privada de las plantaciones (Tenthoff 2011, 9). Los espacios demarcados por el proyecto productivo y el bosque —los agronegocios en nombre de la naturaleza— están entonces estrechamente ligados a la destrucción, en nombre de la reforestación, y a la guerra, en nombre de la paz¹². La violencia de la pacificación en Colombia ha designado este tipo de proyectos verdes no solo como desarrollo sostenible, sino como políticas de sustitución de cultivos ilícitos y de contrainsurgencia. Para el caso de la teca, la compra masiva de predios se ha dado bajo

12 Como señala la organización no gubernamental ILSA (Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos) en su investigación sobre los efectos de la implementación de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación en el 2002, en el marco de las políticas de Seguridad Democrática de los dos gobiernos de Álvaro Uribe: «la fuerza pública desarrolló estrategias de control social, materializadas en confinamiento a comunidades —controles de la movilidad, supervisión en la compra y abastecimiento de alimentos de la población, estigmatización y persecución de dirigentes campesinos y capturas masivas—, lo que junto con la conformación de las denominadas “Redes de Informantes”, organizadas bajo el servicio de las autoridades militares y de policía, conllevaron a desestabilizar los movimientos sociales e impactaron de forma negativa la participación ciudadana y social en la región» (De Los Ríos, Becerra y Oyaga 2012, 6).

la supuesta lucha contra la degradación ambiental y con el rótulo de reforestación y aforestación. Incluso muchos de estos proyectos ni siquiera requieren del título de propiedad ya que han sido implementados bajo contratos de arrendamiento por 25 años.

Los grupos de campesinos con los que hemos trabajado en la región tienen claras estas conexiones entre violencia y desarrollo. Esto fue evidente en una larga conversación que sostuvimos el 27 de mayo del 2013 con uno de estos grupos. Por un lado, para ellos no existe la menor duda de que las muertes, las desapariciones forzadas y los desplazamientos hacían parte de un proyecto económico de acaparamiento de tierras muy fértiles: «no esperaban a que termináramos de irnos cuando ya estaban metiendo los árboles». Como si fuera poco, su expulsión se legalizó bajo la idea de que ellos eligieron vender la tierra: «si te amenazan, si te cierran la vía, si te quitan el acceso al agua, [...] ¿cómo no va uno a vender? [...] [Los paramilitares te decían] “tranquilo, no venda, yo más adelante le compro a su viuda”». Al hablar de la implementación de los cultivos de palma y teca, señalaron cómo no solo se trataba de robarles las tierras, sino de convertirlos en mano de obra barata para las plantaciones. Para ellos, el hecho de volverlos jornaleros y consumidores de productos, cuando antes eran capaces de producir su propia comida, es la base de la rentabilidad de estas empresas.

Asimismo, los campesinos denuncian que a menudo los cultivos se impulsan en la región como programas de desarrollo comunitario basados en alianzas productivas: ellos ponen la tierra y el trabajo, y la empresa pone el capital. Pero el modelo «gana-gana-gana», donde empresas, campesinos y medio ambiente se benefician, que tanto impulsa el gobierno nacional y el local, solo muestra el cinismo con el que se ejerce esta violencia: «¡nos van a venir a financiar los mismos que nos están masacrando!». Por otro lado, está la transformación de sus fuentes de sustento en espacios inhabitables: «El agua se secó, cortaron árboles de más de 80 años, ya no hay cultivo que aguante los químicos [fertilizantes y pesticidas con que se fumigan las plantaciones y se vierten al agua]. Eso de la teca solo ha generado pobreza y hambre». En una de las

entrevistas citadas por Tenthoff un campesino narra otro aspecto de la destrucción que implica el proyecto de reforestación de Argos s.a.: «[l]legaron 12 buldózers que arrasaron con todo. Animales que abundan en esta región que están en peligro de extinción [...] les amontonaron como piedras» (2011, 10).

La expansión de las plantaciones ha generado gran presión en torno al uso de los recursos, así como a los desechos derivados de la utilización de agroquímicos. Distintas poblaciones están atrapadas por el avance de la palma y la teca, no solo debido a la dramática transformación del uso del suelo, sino también por los dispositivos de seguridad privada que protegen a las plantaciones. Los campesinos desplazados que han decidido regresar a la zona, a pesar de las continuas amenazas y la incertidumbre, a menudo señalan cómo el espacio mismo de subsistencia se ha estado reduciendo a causa de la agroindustria verde. Se sienten «sitiados» al estar literalmente cercados por los monocultivos. Esto ha implicado distintos patrones de movilidad resultantes de nuevos límites tanto físicos como simbólicos. Estas reconfiguraciones espaciales son fundamentales para entender el régimen extractivista que conecta los actuales proyectos de descarbonización —y sus nuevos modos de mercantilización de la naturaleza— y los «despojos verdes», o sea, despojos por proyectos de conservación y desarrollo sostenible que se diseñan e implementan en nombre de la protección ambiental (Fairhead, Leach y Scoones 2012).

Si bien es fundamental entender estas plantaciones en términos de los nutrientes, el agua y el trabajo que se extrae de Montes de María para alimentar a una economía verde delineada desde fuera, es igualmente importante prestar atención a lo que queda. ¿Cómo se redefinen y reconstituyen las ecologías sociales y materiales en paisajes de violencia, destrucción y despojo? Una de las intervenciones teóricas que considero pertinentes en ese sentido es la de *formaciones imperiales* de Ann Stoler (2013). Las redes de poder que entrelazan mercados verdes y despojos verdes son comprendidas mejor, no como sombras del imperio, sino a través de las relaciones de fuerza que constituyen historias y geografías relacionales. La autora se refiere a los procesos particulares de destrucción,

desplazamiento y reclamación como los «escombros del imperio», sus ruinas y sus estragos. Se trata entonces de estudiar:

El *tejido conectivo* que continúa amarrando potenciales humanos a ambientes degradados, y humanidades degradadas al desecho material de los proyectos imperiales —a los espacios redefinidos, a los suelos envenenados, a las relaciones rotas entre personas y personas, y entre personas y cosas. (2013, 7-8. Traducción propia)

Aquí es fundamental, entonces, examinar con cuidado las espacialidades específicas de las formaciones imperiales que se movilizan como parte de la ecogubernamentalidad climática; esto es, «la “trayectoria concreta” de las exclusiones y los descarrilamientos coloniales que labran las estructuras de privilegio, ganancia y destrucción hoy en día» (Stoler 2013, 23. Traducción propia).

En Montes de María, la teca y la palma han sido sembradas en tierras que han pasado por la ganadería, el tabaco y el arroz, entre otros proyectos agroindustriales que han sido implementados en la región bajo las promesas rotas del desarrollo y la revolución verde. Los ensamblajes globales detrás de la explotación y la extracción no son nuevos en esta región. Pero estas tierras son, al mismo tiempo, el sustrato de una larga memoria de lucha por la tierra, de movilizaciones campesinas y de sueños de autonomía territorial. Las geografías sedimentadas en Montes de María no son solo la historia del capital o del poder colonial. En estas geografías sedimentadas es que irrumpen violentamente las articulaciones entre desarrollo, neoliberalismo y protección ambiental alrededor del cambio climático. A menudo se piensa que la guerra en Colombia es endémica y que «restaurar el imperio de la ley» es la solución. Pero justamente desarrollo y violencia son dos caras de la misma moneda. Los mercados verdes de agrocombustibles y bonos de carbono dependen materialmente de paisajes que han sido forjados a punta de bala y capital empresarial. La violencia paramilitar, ejercida con consentimiento e incluso apoyo del Estado, ha estado fuertemente ligada a las dinámicas de acumulación por despojo en la región.

Las dislocaciones y desposesiones sutiles que implican estos despojos van más allá de la imposición de una «geografía del

terror» (Oslender 2008) en Montes de María, en tanto que la violencia no es una simple colección de acontecimientos dramáticos que irrumpen en los espacios de vida de las personas. La forma en la que el miedo, el sufrimiento, el dolor, la angustia y la muerte se han inscrito en el día a día de los pobladores de la región tiene claras materializaciones en el espacio y en los cuerpos que hablan más de geografías sedimentadas, que de espacios vacíos y vidas destruidas. Por ejemplo, la producción del bosque-sumidero de carbono como proyecto productivo, responsable social y ambientalmente, ha implicado no solo el desplazamiento de los campesinos que vivían en esas tierras y dependían de ellas para subsistir, sino que su historia misma ha quedado sepultada bajo las plantaciones, al punto que es casi imposible reconocer en ellos la casa, las matas de ñame, los ñeques y el pozo. Estas historias ambientales, que hablan de las diversas formas de ser y estar en la naturaleza de distintas poblaciones rurales, han sido reconfiguradas violentamente por las hileras de palma, teca y otras especies necesarias para el funcionamiento de la economía verde.

Esta aniquilación de las historias de vida en el espacio ha estado acompañada por complejos procesos de producción de sujetos. Para los líderes campesinos, cuyas vidas han estado dedicadas a la lucha por la autonomía territorial, la implementación de monocultivos en Montes de María ha implicado el paso de ser dueños de su propio trabajo y productores de su propia comida, a ser jornaleros por un sueldo de miseria y consumidores de productos traídos desde lejos por los que toca pagar en efectivo. El ser campesinos sin tierra implica una fuerte reconfiguración en sus subjetividades políticas que ahora están fuertemente atravesadas por el lenguaje estatalizado de la victimización. Ser «desplazados» implica nuevas formas de legibilidad frente al Estado, que en muchos casos restringen su margen de acción y los deja a merced de los ires y venires burocráticos de los procesos de restitución sin redistribución y de reparación sin justicia, que se han estado adelantando fallidamente con la premisa irrisoria de que Colombia es un país en posconflicto.

Estos procesos de subjetivación están acompañados de un hecho todavía más irónico y es el lugar que ocupan estos campesinos

dentro de las narrativas de la economía verde. Este lugar está en la tensión entre la visión bucólica de la economía campesina como repositorio de conocimientos, que nos podrían salvar de las catástrofes asociadas al cambio climático, y la visión de que son ellos los principales agentes de la degradación de los suelos y la deforestación. Los sistemas clasificatorios de la diferencia operan, en este caso, muy ligados a la imagen de que el trabajo y la naturaleza son dos entidades antagónicas. En tanto los campesinos son los trabajadores del campo, su racionalidad es en sí misma depredadora del medio ambiente. La ironía radica en que los campesinos deben pelear todos los días su lugar dentro de la categoría de campesinos verdes (ecológicamente apropiados), a la vez que el capitalismo logra posicionarse como ambientalmente responsable. De este modo, las geografías del cambio climático incluyen no solo espacios de despojo en nombre de la naturaleza (la naturaleza «allá» conformada por recursos mal manejados y tierras sobreexplotadas que son potenciales bosques-sumidero), sino a los campesinos —que los han habitado por décadas— como sujetos incapaces de un adecuado comportamiento ambiental. A la vez que sus formas de vida y de sustento terminan siendo criminalizadas, estas poblaciones son vistas como invasores, sus prácticas productivas como degradación y su historia misma en el lugar como un pasado que hay que superar.

La economía verde y otros espejismos

La firma del Protocolo de Kyoto, en 1997, a menudo se marca como el origen de la economía verde. El marco legal firmado por treinta y ocho países del norte global, que se comprometían a reducir sus emisiones, permitió crear el mercado de CO₂. En el 2007, en el Plan de Acción de Bali se determinó que la lucha contra el cambio climático debe incluir políticas e incentivos para la reducción de la deforestación y la degradación de bosques en los países del sur global, actividades que se estima contribuyen al 20% de las emisiones de gases a la atmósfera. Las metas de conservación de los bosques, su uso sostenido y el aumento de los depósitos de carbono, que se estaban discutiendo desde años atrás, entraron a complementar la estrategia de reducción en el uso de combustibles fósiles. Años

después, la convención Río+20, realizada en el 2012, reformó el paradigma de desarrollo sostenible con las premisas de la economía verde, con lo cual expandió las posibilidades de acumulación de capital en nombre de la mitigación del calentamiento global. La comercialización de los gases causantes del efecto invernadero se estipuló bajo dos modalidades: el tope y el trueque —permisos de emisión para las empresas, que operan como licencias para contaminar, expedidos por organismos gubernamentales o intergubernamentales como la Comisión Europea— y las compensaciones o bonos de carbono —resultado de proyectos de ahorros de emisiones implementados con financiación de instituciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, gobiernos y empresas privadas—. El proyecto más importante de la segunda modalidad de comercialización de gases es conocido como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Administrado por la ONU, el MDL financia proyectos de reducción de emisiones de carbono de modo que las empresas pueden comprar el volumen de sus emisiones en Certificados de Emisiones Reducidas (CERS) en otros lados del mundo (Gilbertson y Reyes 2009). Adicionalmente, existen mercados voluntarios de bonos de carbono que se transan en mercados internacionales con verificación de distintas ONG.

Ambas estrategias, tanto en su diseño como implementación, están basadas en una geografía aplanada del mundo: un sur global de naturalezas en peligro, mal manejadas; y un norte global consumidor verde. Las múltiples relaciones de poder que entretejen paisajes, lugares, modos de sustento, economías morales, historias de vida, etc., a lo largo de la distancia y la diferencia, han sido borradas eficientemente. El esquema de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) nace de estas redes enraizadas. REDD, y su versión reciente REDD+, donde el signo *más* representa las metas simultáneas de protección ambiental y de desarrollo de comunidades rurales, operan hoy en día como parte de los mercados voluntarios de carbono. Si bien los proyectos REDD no han sido aprobados aún por parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su implementación dentro de mercados voluntarios ha tenido consecuencias

dramáticas. Adicionalmente, bajo las promesas que ofrece REDD, los proyectos de comercio de emisiones se financian con fondos públicos a menudo dedicados a programas de REDD-*readiness* (preparación para REDD), cuyos efectos para las comunidades locales son altamente problemáticos.

Incluso, algunas personas que apoyan la lógica de estos esquemas coinciden en que REDD y REDD+ se convirtieron en una forma de desarrollo tradicional que excluye a las comunidades y que se ha traducido en una aceleración del reemplazo de esquemas locales socioproductivos por usos no sostenibles del suelo (Scholz y Schmidt 2008; Angelsen *et al.* 2012; Pokorny, Scholz y de Jong 2013). Las críticas apuntan a que los bonos de carbono no garantizan transformaciones de fondo en las industrias extractivas y en las actividades económicas asociadas a estas:

Las compensaciones de carbono son «proyectos ahorradores de emisiones» que en teoría «compensan» por las emisiones de los «contaminantes», sin embargo [e]ste esquema les permite a los gobiernos contaminantes y corporaciones [...] comprar su boleto de salida para escapar del problema con proyectos baratos que exacerban los conflictos sociales y ambientales en el Sur. (No REDD+ 2010, 24).

Adicionalmente, la organización Carbon Trade Watch (el Observatorio del Comercio de Carbono) ha denunciado estos proyectos de descarbonización por estar asociados a la agudización de conflictos socioambientales, violaciones de derechos humanos y la militarización de espacios civiles (Carbon Trade Watch 2013). De este modo, los proyectos de mitigación del cambio climático han demostrado ser tanto inefectivos como injustos (Lohmann 2006).

El manifiesto No REDD! No REDD Plus! (No REDD+ 2010), de la Campaña Global de firmantes en rechazo a los esquemas de Reducción de las Emisiones de la Deforestación y Degradación, deja en claro que las iniciativas de descarbonización hacen parte de las «soluciones inefectivas e injustas al cambio climático» (No REDD+ 2010, 115). El documento denuncia cómo las licencias para contaminar, no solo «están diseñadas de manera que obstruyen la única

solución factible al cambio climático: dejar el petróleo, carbón y gas bajo tierra» (115), sino que fracasan en proteger el futuro de los bosques y de los pueblos que dependen de ellos:

[L]a idea de que REDD podría ayudar a asegurar los territorios o consolidar los derechos del sustento de las personas dependientes de los bosques es absurda. En los mercados voluntarios de carbono, los proyectos de carbono forestal y de tipo REDD ya han resultado en la confiscación de tierras, evicciones violentas, desplazamientos forzados, violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas, militarización, pérdida del acceso a tierras y sustento, pérdida de la diversidad biológica, fraude, coerción y la corrupción de lo sagrado. (116)

En el caso de Montes de María, estas advertencias fueron confirmadas. Pero incluso las críticas más agudas fallan en entender que el bosque a proteger resulta de estos mecanismos. *El bosque* en distintos municipios de la región emerge de la plantación forestal: para expertos, funcionarios estatales y empresarios, entre otros actores que influyen la formulación de política pública, las líneas de teca son el bosque, no los árboles nativos; el monocultivo es lo que hay que proteger, no los hábitats de los cuales dependen gran cantidad de humanos y no humanos. De esta manera, los cultivos, el arroyo y el monte han sido reconfigurados violentamente por el capital.

Esta reconfiguración se sostiene en procesos multiescalares que han reducido la(s) crisis ambiental(es) al cambio climático. Más aún, en el discurso hegemónico, la mitigación del cambio climático se ha simplificado a la reducción de emisiones, estas últimas mercantilizadas y empaquetadas eficientemente bajo la figura de los CERS. Estos procesos constituyen un régimen de descarbonización estrechamente ligado con la producción de nuevas desigualdades socioambientales y el mantenimiento de otras ya existentes. Este régimen está basado en las asimetrías de poder que conectan distintos lugares del globo bajo nuevas políticas de la escala (Bulkeley 2005) y resultan en «geografías profundamente desiguales que conectan permisos para contaminar y regulaciones y tratados internacionales, con oportunidades de obtener proyectos baratos de compensación y reducción de carbono en el Sur» (Bumpus y

Livermann 2008, 147. Traducción propia). Por un lado, los proyectos de descarbonización constituyen un nuevo mecanismo de acumulación por despojo, como lo argumentan estos autores (142) siguiendo a David Harvey (2005), en tanto involucran la transformación de bienes de uso colectivo a propiedades privadas a través de la usurpación de recursos naturales por poderes coloniales, y de la intervención del estado por medio de la ley y el poder militar. Por otro lado, con el calentamiento global convertido en dispositivo de acumulación de capital, nuevas formaciones imperiales se han hecho posibles. La intervención de agencias multilaterales de financiación, ejércitos internacionales, bancos y empresas se ha legitimado en nombre del cambio climático con efectos claros en términos de una mayor mercantilización, privatización y financiarización de los recursos naturales.

La política pública en Colombia promueve el mercado de dióxido de carbono desde el año 2002. El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), marcado por una masiva contrarreforma agraria, creó el marco legislativo bajo el cual Colombia se convirtió en un destino atractivo para empresas de reforestación. Los bosques-sumidero de carbono han sido producidos, entonces, como parte de la necesidad de «promover la incursión competitiva de Colombia en el mercado internacional de reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero» (MAVDT y DNP 2013). El mercado de carbono se ha entendido como un mecanismo de protección de la naturaleza y una oportunidad de desarrollo para las comunidades locales, así como una estrategia de erradicación de cultivos ilícitos y, por lo tanto, de contrainsurgencia. En la actualidad, Colombia es el cuarto país en América Latina con mayor número de proyectos registrado ante la UNFCCC. Las ganancias por estos proyectos fueron de alrededor de 140 millones de dólares en el 2010 (Tenthoff 2011, 2). Hoy en día, existen 190 proyectos MDL en el país y el Plan Nacional de Desarrollo proyecta llegar a 300 en el 2014 (Ministerio del Medio Ambiente 2013). Si bien REDD no ha sido establecido aún como esquema global de reducción de emisiones, los depósitos de carbono de teca y otros maderables avanzan bajo la

expectativa de que, en unos años, el mercado de emisiones crezca exponencialmente.

Como ya he mencionado, las geografías particulares del nuevo régimen de descarbonización en Colombia se han dado bajo la producción de los espacios inhabitables de los megaproyectos agroindustriales, como el que avanza Argos S.A. en Montes de María. El proyecto de reforestación implementado en la región en el 2005, registrado como MDL, incluye 3.000 hectáreas en una zona de la que se estima fueron violentamente expulsados 120.000 campesinos (De Los Ríos, Becerra y Oyaga 2013). Hace dos años la empresa de cementos anunció la puesta en marcha de un proyecto de reducción de emisiones cuatro veces más grande en la región. La prensa nacional no deja de celebrar el proyecto argumentando que este

[...] tiene beneficios ambientales como la captura de [900.000 toneladas de] CO₂, protección de suelos, disminución de la erosión, aumento de la calidad del agua, reducción de la presión sobre los bosques naturales y creación de refugios y corredores para la fauna. En cuanto a los beneficios sociales, se destacó la generación de 250 empleos directos permanentes y el mejoramiento de la estructura y calidad educativa e infraestructura. (*Portafolio* 2011)

De esta manera, la «responsabilidad ambiental y social corporativa» termina ocultando e incluso legitimando el acaparamiento de tierras por parte de empresarios, irónicamente verdes. Nuestro trabajo con organizaciones campesinas da cuenta de todo lo contrario: «La teca se chupa todo. Esas plantaciones no pueden ser ecológicas porque no le dejan nada al suelo» (27 de mayo del 2013). Según varios de los campesinos de la región, los pocos empleos que ha generado se pagan a dos dólares el día y «eso no es empleo».

La destrucción de las ecologías materiales y sociales que sustentan la vida de miles de pobladores rurales no se puede desligar del espejismo de la economía verde. Esto se hace evidente a través de los paisajes devastados en nombre de la conservación y del empoderamiento de las comunidades locales. A pesar de estos claros efectos materiales de la economía verde, las narrativas oficiales

sobre la lucha contra el cambio climático —e incluso muchas de las críticas bienintencionadas a esta— insisten en dos peligrosas premisas. La primera es suponer que el contexto en el cual se implementan estos proyectos ya está dado, y no reconocer que la tierra, el agua y la mano de obra «disponibles» son en gran parte el resultado de estos proyectos. En otras palabras, la tierra debe ser usurpada, el agua debe ser acaparada y los pobladores locales deben ser llevados al punto en el que trabajar para la compañía sea la única opción. El sur global debe ser constantemente reproducido como naturalezas exuberantes mal administradas, sus habitantes como agentes de degradación y los bonos de carbono como «deforestación evitada». La segunda premisa es la idea de que las estrategias de reducción de emisiones son buenas pero han sido mal aplicadas, y no aceptar que su misma lógica exige un mapa particular del mundo: un mapa de geografías desiguales del capital, de la seguridad, de la movilidad y de la posibilidad misma del reclamo de derechos. MDL y REDD, desde su concepción, son proyectos políticos que emergen de profundas asimetrías de poder y en sí mismos son poderosas herramientas de reconfiguración de ecologías políticas ancladas en realidades materiales y sociales localizadas. En últimas, el régimen de descarbonización es a la vez causa y resultado de la producción de desigualdades socioambientales.

Por supuesto, el análisis debe ir más allá de la noción de un mecanismo perverso diseñado por unos pocos, casi como una conspiración siniestra y planeada desde arriba, así como de la idea de que es una buena herramienta, pero que contextos como el colombiano no ofrecen garantías mínimas para su implementación. Se trata de entender las geografías del cambio climático; es decir, las espacialidades concretas de las articulaciones entre conservación, desarrollo y el proyecto neoliberal. Es poco útil seguir pensando que el problema es de Colombia, cuyo gobierno es el responsable de beneficiar a pequeños agricultores, de aclarar títulos de propiedad y de garantizar los derechos básicos de su población. No solo esta idea está basada en el mito del estado fallido (c.f. Bolívar 2010; Serje 2012), sino en el espejismo de la gobernanza ambiental como un problema de buen gobierno. Los viejos tropos del estado ausente, la institucionalidad

fallida, la legislación débil y la soberanía incompleta son en realidad las manifestaciones capitalistas y militaristas de un estado revanquista, cuyo papel en la producción de desigualdades transregionales debe ser analizado con cuidado. Los «retos y límites» a la gobernanza ambiental global no son otra cosa que las tensiones, pugnas y negociaciones en torno a la nueva ecogubernamentalidad global.

En Montes de María el estado no está ausente y la violencia no es un factor externo a los proyectos de conservación y desarrollo. A menudo se asume que el proyecto llega, como en paracaídas, y la violencia de trasfondo hace que su implementación falle. Pero, como he tratado de mostrar, violencia y economía verde van de la mano y son las configuraciones particulares de lo político en el país y en la región las que, en últimas, garantizan la viabilidad del proyecto productivo. Un estado que garantiza la impunidad asegura la acumulación de capital. Incluso, como muestra Roosbelinda Cárdenas (2012), en su investigación en el Bajo Mira, los regímenes poco claros de propiedad tampoco pueden entenderse como la causa de los efectos trágicos de estos proyectos de descarbonización. El título de propiedad y la consulta previa no han probado ser garantes de la autonomía de las poblaciones locales y, más aún, no las han protegido de la violencia ni del despojo. Las conexiones entre las políticas de mitigación del cambio climático y los procesos de reconfiguración del uso y control de los recursos, como he insistido a lo largo de este capítulo, deben ser entonces entendidas a través de sus geografías particulares, como lo demuestran otros estudios, incluyendo el de Alejandro Camargo (2013) sobre la reconfiguración de los paisajes agrarios en el Caribe colombiano y el de Juli Hazlewood (2011) sobre la implementación de proyectos de mitigación del cambio climático en territorios de poblaciones indígenas y afrodescendientes en Ecuador.

El espejismo de la economía verde requiere, entonces, de otros espejismos: el *brochure* de la empresa palmera, las ilusiones de la restitución de tierras, el mito del estado que no está, entre otros. Lo que se necesita para contar una historia más completa es justamente rastrear estas conexiones y las realidades concretas que se ocultan bajo los imperativos verdes en torno a la catástrofe global ambiental.

Reflexiones finales

El régimen de descarbonización originado dentro de la economía verde contribuye a reforzar viejas desigualdades socioecológicas y a crear otras nuevas. Mi experiencia en Montes de María muestra, además, que este régimen es a la vez el resultado de profundas asimetrías de poder. A pesar de que gran parte de la literatura crítica sobre el cambio climático se enfoca en las escalas de lo global y de lo local, rara vez se logra un análisis multiescalar que permita entender las espacialidades concretas de las redes de poder que dan forma al nuevo orden verde global. En este texto me he enfocado sobre todo en cómo las condiciones de posibilidad de la implementación de proyectos agroindustriales, en nombre de la naturaleza, incluyen geografías desiguales que han puesto el suelo, las semillas, el agua, los cuerpos y las vidas de las poblaciones rurales al servicio del capital. Esto no ha sido siempre así para el caso de Montes de María, una región con una historia de fuertes movilizaciones campesinas, incluyendo tomas de tierras («recuperaciones») para el establecimiento de autonomías territoriales. Pero en años recientes la región ha sido violentamente reconfigurada en paisajes de despojo y acaparamiento ligados al establecimiento de proyectos de reducción de emisiones y de producción de agrocombustibles, entre otros monocultivos.

Una mirada cuidadosa a las redes enraizadas del régimen actual de descarbonización permite una mejor comprensión de las interdependencias multiescales que dan forma a cómo entendemos, habitamos y producimos la naturaleza, así como a las asimetrías de poder y a las oportunidades desiguales que encierran. Es en el estudio de la espacialización misma de las articulaciones entre desarrollo, conservación y neoliberalismo que es posible entender las geografías del cambio climático y sus conexiones con la constitución de geografías sedimentadas de la violencia en Montes de María. Asimismo, el régimen de descarbonización depende de formaciones imperiales específicas. Una de estas son las geografías imaginadas que soportan las versiones hegemónicas de la naturaleza climática e incluyen procesos de producción del sur global como un acervo de bosques que deben ser salvados de ser talados y un repositorio de tierras por convertir en depósitos de carbono. Creo entonces necesario contribuir

a una geopolítica crítica del cambio climático y de su mitigación. Siguiendo la geopolítica feminista, estas geografías operan a través de la reconfiguración de la vida cotidiana y, por lo tanto, deben ser rastreadas desde la constitución de paisajes y cuerpos concretos.

Debe quedar claro que mi argumento no es negar la existencia de una crisis ambiental global ni minimizar sus alcances y consecuencias. Por el contrario, busco entender cómo los cerramientos en torno a qué entendemos por esta crisis tienen efectos materiales concretos. Pienso que es a través del estudio de las redes de poder y la producción de los espacios materiales que las anclan que se puede entender mejor la conexión entre políticas del cambio climático y la producción de desigualdades socioecológicas¹³. Es justamente la gravedad de los efectos de la crisis ambiental sobre las ecologías sociales y materiales, que sustentan la vida misma, lo que nos obliga a contestar la manera en la que los reclamos y las luchas por la justicia climática han sido a menudo silenciados por las *alternativas sostenibles* mucho más tentadoras que ofrece la economía verde.

Confío, además, en que esta perspectiva multiescalar, desde los espacios concretos de los ensamblajes globales —la naturaleza planetaria, el bosque-sumidero, la reserva natural, el monte y la parcela, entre tantos otros—, no solo permite una mejor comprensión de los procesos que implica la crisis global ambiental, sino que hace evidente que las salidas a esta dependen de la capacidad de forjar alianzas y coaliciones a través de la diferencia y la distancia. En palabras de Rocheleau (2011, 209),

[t]odos nosotros vivimos en ecologías emergentes —ensamblajes complejos de plantas, animales, personas, características físicas del paisaje y tecnologías— que han sido creadas a través de prácticas habituales de conexión en la vida cotidiana. Habitamos a la vez que cocreamos estas ecologías que constituyen nuestro hogar, a menudo sin la capacidad de «verlas» claramente. (Rocheleau 2011, 209. Traducción propia)

13 Si algo hace urgente esta tarea es el fracaso evidente de las políticas de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Por ejemplo, el año pasado se alcanzaron niveles históricos de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, llegando a 400 partes por millón (Vidal 2013).

Referencias

- Angelsen, A., M. Brockhaus, W. Sunderlin y L. Verchot, eds. 2012. *Analysing REDD+: Challenges and choices*. Bogor: CIFOR.
- Antipode. 2010. Capitalism and Conservation. *Antipode* 42 n.º 3: 469-799.
- Bocarejo, D. En prensa. *Tipologías y topologías de la diferencia*. Bogotá: Universidad Javeriana, ICANH.
- Bolívar, I. 2010. Formación del Estado y biografía de las categorías. *Nómadas* 33: 93- 107.
- Boykoff, M. 2009. El caso del cambio climático: los medios y la comunicación científica científica. *Infoamérica* (agosto-diciembre): 117-127.
- . 2011. *Who speaks for the climate? Making sense of media reporting on climate change*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Braig, M. y B. Göbel. 2013. Ciudadanía y globalización del medio ambiente: resistencias, conflictos, negociaciones. *Revista Iberoamericana* XIII n.º 49: 87-162.
- Braun, B. 2002. *The Intemperate Rainforest: Nature, Culture and Power on Canada's West Coast*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Bulkeley, H. 2005. Reconfiguring Environmental Governance: Towards a Politics of Scales and Networks. *Political Geography* 24: 875-902.
- Bumpus, A. y D. Liverman. 2008. Accumulation by Decarbonization and the Governance of Carbon Offsets. *Economic Geography* 84 n.º 2: 127-155.
- Camargo, A. 2013. Environmental Disasters and Agrarian Transformations: Frictions, Articulations, and Challenges. Ponencia presentada en la Conferencia Transformation in a Changing Climate, Oslo, Noruega, 19-21 de junio.
- Carbon Trade Watch. 2013. *Protecting Carbon to Destroy Forests: Land enclosures and REDD+*. http://www.redd-monitor.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/redd_and_land-web.pdf
- Cárdenas, R. 2012. Articulations of Blackness: Journeys of an Emplaced Politics in Colombia. Tesis doctoral, Universidad de California Santa Cruz.
- Coronado, S. y K. Dietz. 2013. Controlando territorios, reestructurando relaciones socio-ecológicas: la globalización de agrocombustibles y sus efectos locales, el caso de Montes de María en Colombia. *Iberoamericana* 49: 93-116.

- Coronil, F. 2002. *El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*. Caracas: Nueva Sociedad.
- Davis, M. 2008. Living on the Ice Shelf: Humanity's Meltdown. *Tom Dispatch*, junio 26. http://www.tomdispatch.com/post/174949/mike_davis_welcome_to_the_next_epoch.
- . 2010. Who Will Build The Ark?. *New Left Review* 61 (enero-febrero): 29-46.
- De Los Ríos, E., C.A. Becerra y F. Oyaga. 2012. *Montes de María. Entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de tierras*. Bogotá: ILSA.
- Escobar, A. 2010. *Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes*. Popayán: Enviñón Editores.
- Fairhead, J., M. Leach e I. Scoones. 2012. Green Grabbing: a new appropriation of nature? *Journal of Peasant Studies* 39 n.º 2: 237-261.
- Gilbertson, T. y Ó. Reyes. 2009. *El mercado de emisiones: cómo funciona y por qué fracasa*. Carbon Trade Watch. http://www.carbontradewatch.org/downloads/publications/mercado_de_emisiones.pdf.
- Grajales, J. 2011. The Rifle and the Title: Paramilitary Violence, Land Grab and Land Control in Colombia. *Journal of Peasant Studies* 38 n.º 4: 771-792.
- Gudynas, E. 2005. Geografías fragmentadas: sitios globalizados, áreas relegadas. *Revista del Sur* 160: 3-13.
- . 2009. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. En *Extractivismo, política y sociedad*, eds. J. Schuldt et al., 187-225. Quito: CAAP y CLAES.
- . 2012. Estado compensador y nuevos extractivismos: las ambivalencias del progresismo sudamericano. *Nueva Sociedad* 237: 128-146.
- Haesbaert, R. 2011. *El mito de la desterritorialización. Del Fin de los territorios a la multiterritorialidad*. México, D.F.: Siglo XXI.
- Hall, S. 2010. Sobre postmodernismo y articulación. *Sin Garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Popayán: Enviñón Editores.
- Hartmann, B. 2010. Rethinking Climate Refugees and Climate Conflict: Rhetoric, Reality and the Politics of Policy Discourse. *Journal of International Development* 22 n.º 2: 233-246.

- Harvey, D. 2005. *A brief history of neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hazlewood, J. 2011. Geographies of Colonialism and Hope in the Northwest Pacific Frontier Territory-region of Ecuador. Tesis doctoral, Universidad de Kentucky.
- Heynen, N., J. McCarthy, S. Prudham y P. Robbins, eds. 2007. *Neoliberal Environments: False Promises and Unnatural Consequences*. Londres / Nueva York: Routledge.
- Igoe, J. 2010. The Spectacle of Nature in the Global Economy of Appearances: Anthropological Engagements with the Spectacular Mediations of Transnational Conservation. *Critique of Anthropology* 30 n.º 4: 375-397.
- Katz, C. 2008. Bad Elements: Katrina and the Scoured Landscape of Social Reproduction. *Gender, Place and Culture* 15 n.º 1: 15-29.
- Leff, E. 2005. La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza. Seminario Internacional REG GEN: Alternativas Globalizaçao. Rio de Janeiro. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp12.pdf>.
- Leis, H. y E. Viola. 2003. Gobernabilidad global posutópica, medio ambiente y cambio climático. *Nueva Sociedad* 185:34-49.
- Lohmann, L, ed. 2006. *Carbon Trading: A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power*. Uppsala: Dag Hammarskjöld Foundation.
- . 2008. The Politics of Climate Change. *Transnational Institute*, septiembre 26. <http://www.tni.org/article/politics-climate-change>
- Massey, D. 1994. *Space, Place, and Gender*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Merchant, C. 1996. Reinventing Eden: Western Culture as a Recovery Narrative. En Cronon, W., ed. *Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature*. Nueva York: W. W. Norton & Co.
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT y Departamento Nacional de Planeación-DNP. 2003. *Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de mitigación del cambio climático*. Documento Conpes 3242. Bogotá: República de Colombia.

- Ministerio del Medio Ambiente. 2013. *Portafolio MDL en Colombia*. Bogotá. <http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1267&conID=7717>.
- Moore, D. 2005. *Suffering for Territory: Race, Place, and Power in Zimbabwe*. Durham: Duke University Press.
- No REDD+. 2010. *No REDD+: una lectura crítica*. <http://noredd.makenoise.org/wp-content/uploads/2010/REDDreaderES.pdf>
- Ogden, L., N. Heynen, U. Oslender, P. West, K. Kassam y P. Robbins. 2013. Global Assemblages, Resilience, and EarthStewardship in the Anthropocene. *Frontiers in Ecology and the Environment* 11 n.º 7: 341-347.
- Ojeda, D. 2012. *Producing Paradise: The Violent Geographies of Tourism in Colombia*. Tesis doctoral, Clark University.
- Ortega, S., A. García-Guerrero, C. Ruíz, J. Sabogal y J.D. Vargas, eds. 2010. *Deforestación Evitada. Una Guía REDD + Colombia*. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Conservación Internacional Colombia, Fondo Mundial para la Naturaleza-wwf, The Nature Conservancy, Corporación Ecoversa, Fundación Natura, Agencia de Cooperación Americana-USAID, Patrimonio Natural - Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y Fondo para la Acción Ambiental.
- Oslender, U. 2008. Another history of violence: the production of 'geographies of terror' in Colombia's Pacific coast region. *Latin American Perspectives* 35 n.º 5: 77- 102.
- Peet, R., P. Robbins, y M. Watts, eds. 2011. *Global Political Ecology*. Nueva York: Routledge.
- Peluso, N. y M. Watts, eds. 2001. *Violent Environments*. Ithaca: Cornell University Press.
- Plumwood, V. 1993. *Feminism and the Mastery of Nature*. Londres: Routledge.
- Pokorny, B., I. Scholz y W. de Jong. 2013. REDD+ for the poor or the poor for REDD+? About the limitations of environmental policies in the Amazon and the potential of achieving environmental goals through pro-poor policies. *Ecology and Society* 18 n.º 2: 3.
- Portafolio*. 2011. Se registró el proyecto de reforestación comercial de Argos, agosto 19. <http://www.portafolio.co/negocios/se-registro-el-proyecto-reforestacion-comercial-argos>.

- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA.
2011. *Hacia una economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza*. <http://www.unep.org/greeneconomy>.
- Pskowski, M. 2013. Is This the Future We Want? The Green Economy vs. Climate Change. *Different Takes* 79: 1-4.
- Rocheleau, D. y R. Roth. 2007. Rooted Networks, Relational Webs and Powers of Connection: Rethinking Human and Political Ecologies. *Geoforum* 38 n.º 2: 433-437.
- Rocheleau, D. 2011. Rooted Networks, Webs of Relation, and the Power of Situated Science: Bringing the Models Back Down to Earth in Zambrana. En *Knowing Nature: Conversations at the Intersection of Political Ecology and Science Studies*, eds. M. Goldman, P. Nadasdy, y M. Turner Matthew, 209-226. Chicago: University of Chicago Press.
- Seager, J. 2006. Noticing Gender (or not) in Disasters. *Geoforum* 37 n.º 1: 2-3.
- Serje, M. 2012. El mito de la ausencia del Estado: la incorporación económica de las “zonas de frontera” en Colombia. *Cahiers Des Amériques Latines*, 71 n.º 3: 95-118.
- Scholz, I. y L. Schmidt. 2008. *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries: Meeting the Main Challenges Ahead*. Briefing Paper 6. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik.
- Stoler, A.L. 2013. Introducción “The Rot Remains”: From Ruins to Ruination a *Imperial Debris: On Ruins and Ruination*, ed. A.L. Stoler. Durham: Duke University Press.
- Sullivan, S. 2009. Green Capitalism, and the Cultural Poverty of Constructing Nature as Service-provider. *Radical Anthropology* 3: 18-27.
- Swampa, M. 2011. Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales: ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas?. Conferencia FLACSO 15 de marzo. Quito.
- Tenthoff, M. 2011. ARGOS s. A. en los Montes de María: La lucha contra el cambio climático como herramienta para la legalización del despojo, el control territorial y la imposición de megaproyectos agroindustriales. Bogotá: COSPACC. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/03/666_ARGOS-en-los-Montes-de-Maria-agosto-2011.pdf.

- Tsing, A. 2005. *Friction. An Ethnography of Global Connection*. Princeton: Princeton University Press.
- Ulloa, A. 2004. *La construcción del nativo ecológico*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- . 2012. *Producción de conocimientos en torno al clima. Procesos históricos de exclusión/apropiación de saberes y territorios de mujeres y pueblos indígenas*. Working Paper Series N.º 21. Berlín: desigualdades.net.
- . 2013. Controlando la naturaleza: ambientalismo transnacional y negociaciones locales en torno al cambio climático en territorios indígenas, Colombia. *Iberoamericana* 49 n.º 1: 117-133.
- Verdad Abierta. 2013. Despojo de tierras. *Verdad Abierta*. <http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras>.
- Vidal, J. 2013. Global Carbon Dioxide Levels Set to Pass 400ppm Milestone. The Concentration of Carbon in the Atmosphere Over the Next Few Days is Expected to hit Record Levels. *The Guardian*, abril 29. <http://www.theguardian.com/environment/2013/apr/29/global-carbon-dioxide-levels>.
- Wainwright, J. y G. Mann. 2013. Climate Leviathan. *Antipode* 45 n.º 1: 1-22.
- Watts, M. 1983. Hazards and Crises: A Political Economy of Drought and Famine in Northern Nigeria. *Antipode* 15 n.º 1: 24-34.
- . 2004. Resource Curse? Governmentality, Oil and Power in the Niger Delta, Nigeria. *Geoforum* 9 n.º 1: 50-80.
- World Resources Institute – WRI. 2013. *RELEASE: New Global Commission Aims to Identify Pathways to Economic Prosperity and a Safe Climate*. <http://www.wri.org/press/2013/09/release-new-global-commission-aims-identify-pathways-economic-prosperity-and-safe-clim>.